



Asamblea General

Distr. general
28 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones
(29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

Nº 33/2011 (Arabia Saudita)

Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de febrero de 2011

Relativa a: Mohamed Abdullah Al Uteibi

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102. El mandato fue prorrogado tres años por el Consejo mediante su resolución 15/18, de 30 septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin la posibilidad de entablar un recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El Sr. Al Uteibi, nacido en 1971, con residencia habitual en Hay Badr, Riad, se dedica a la defensa de los derechos humanos en la Arabia Saudita. Según la información recibida, el Sr. Al Uteibi denunció públicamente las condiciones de reclusión de los presos políticos en la Arabia Saudita. Al parecer, también firmó, junto a otras personas, una petición para que se llevasen a cabo reformas políticas en el Reino, concretamente en favor de la institución de una monarquía parlamentaria y del respeto del principio de la separación de poderes.

4. La fuente afirma que, el 2 de enero de 2009, el Sr. Al Uteibi fue detenido en Riad por agentes de los Servicios de Investigación sauditas (Al-Mabahith). Según la información recibida, la detención del Sr. Al Uteibi se produjo a raíz del intento de celebrar una manifestación pacífica organizada por defensores de los derechos humanos en Riad para protestar por el ataque perpetrado por el ejército israelí en Gaza. La fuente señala que, según las autoridades, la manifestación contravenía los principios del islam.

5. Según la información recibida, durante los dos meses posteriores a la detención, el Sr. Al Uteibi fue recluso en régimen de aislamiento total y sin posibilidad de contacto alguno con el exterior. No se autorizó una visita de su familia hasta dos meses después de su detención. Al Sr. Al Uteibi no se le ha permitido tener acceso a asistencia letrada.

6. Seis meses después de la detención, el Sr. Al Uteibi compareció ante un juez de la Fiscalía Pública, que determinó que no se habían incoado diligencias penales en su contra y ordenó su puesta en libertad. Según la información recibida, el Ministerio del Interior se negó a cumplir la orden de excarcelación. Hasta la fecha, no se ha informado al Sr. Al Uteibi de los hechos que se le imputan.

7. La fuente sostiene también que, si bien el Sr. Al Uteibi no ha sido formalmente acusado, su detención y encarcelamiento se debieron al intento de organizar, junto a otros defensores de los derechos humanos, una manifestación pacífica para expresar su opinión sobre los hechos ocurridos en Gaza. La fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Al Uteibi es consecuencia directa del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y expresión.

8. La fuente señala que el Sr. Al Uteibi no ha podido oponerse a la legalidad de la detención ante una autoridad competente ni solicitar asistencia letrada. Según la información recibida, el Sr. Al Uteibi se encuentra actualmente recluso en la prisión de Al Hayr.

Respuesta del Gobierno

9. El Grupo de Trabajo transmitió estas alegaciones al Gobierno de la Arabia Saudita solicitando que le facilitase, en su respuesta, información detallada sobre la situación del Sr. Al Uteibi y que especificase las disposiciones legales que sustentan la prolongación de su reclusión.

10. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno, ya que habría acogido con agrado la cooperación del Gobierno de la Arabia Saudita.

Deliberaciones

11. De conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre la base de la información facilitada.

12. Tras examinar la información presentada, el Grupo de Trabajo considera que el presente caso plantea cuestiones relativas a la inobservancia de determinadas normas nacionales e internacionales de derechos humanos. La detención prolongada y privación de libertad del Sr. Al Uteibi guardan estrecha relación con su labor como defensor de los derechos humanos y su apoyo a la reforma constitucional de su país, así como con el intento de organizar una manifestación para protestar por el ataque israelí contra Gaza. Además, se le mantuvo recluido en régimen de aislamiento durante dos meses sin que se le imputara ningún delito y no fue puesto a disposición judicial hasta seis meses después de la detención. Las autoridades hicieron caso omiso de la orden de excarcelación dictada por un juez y el Sr. Al Uteibi no ha tenido acceso a asistencia letrada. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de que el Sr. Al Uteibi no ha podido oponerse a la legalidad de su detención y prolongada reclusión, ni recurrir ante una autoridad superior.

13. La detención del Sr. Al Uteibi vulnera el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que: "[n]adie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". En particular, el hecho de que las autoridades sauditas no hayan cumplido la orden de excarcelación dictada por el juez apoya la conclusión de que no existen fundamentos jurídicos que justifiquen la privación de libertad del Sr. Al Uteibi. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al Uteibi es arbitraria y se inscribe en la categoría I aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

14. La detención del Sr. Al Uteibi es también contraria al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Un aspecto fundamental de ese derecho es la posibilidad de oponerse a la legalidad de la reclusión. La antigua Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1992/35, de 28 de febrero de 1992, instó expresamente a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho a establecer un procedimiento como el hábeas corpus a fin de que todas las personas privadas de libertad pudieran promover un proceso judicial ante un tribunal para que decidiera, sin dilaciones indebidas, si la detención era lícita y ordenase la puesta en libertad si la detención resultara ser ilegal. El Sr. Al Uteibi no ha podido oponerse a la legalidad de la detención ante un tribunal competente y no ha tenido acceso a un abogado ni contacto regular con su familia. La inobservancia de las normas internacionales relativas a un juicio imparcial descritas más arriba hace que la privación de libertad sea arbitraria y se inscriba en la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

15. El Grupo de Trabajo toma nota con preocupación del patrón continuado de silencio adoptado por el Gobierno de la Arabia Saudita, que ha dejado pasar la oportunidad de responder a las acusaciones relativas a la detención arbitraria presentadas por la fuente al Grupo de Trabajo. Viene habiendo cada vez más casos de detención y privación de libertad de personas que ejercen sus derechos humanos fundamentales en la Arabia Saudita, en

particular el derecho a la libertad de opinión, expresión y asociación (véanse, por ejemplo, las opiniones Nos. 22/2008, 36/2008, 37/2008, 2/2011, 10/2011 y 30/2011 del Grupo de Trabajo). Por lo tanto, cabe aseverar que el caso del Sr. Al Uteibi confirma lo que parece ser la regla y no la excepción de no respetar debidamente los derechos humanos fundamentales. Sobre la base de la información de que dispone, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al Uteibi es arbitraria y se inscribe en la categoría II aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

16. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno de la Arabia Saudita que el derecho internacional consuetudinario prohíbe la detención arbitraria. Se ha reconocido oficialmente como *jus cogens* o norma imperativa de derecho internacional (véase la observación general N° 29 (2001) del Comité de Derechos Humanos sobre el estado de excepción, párr. 11) a la que se remite el Grupo de Trabajo en sus opiniones. El Grupo de Trabajo ha hecho suyo el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Ahmadou Sadio Diallo (la República de Guinea c. la República Democrática del Congo)*, de 30 de noviembre de 2010, en particular los argumentos del Magistrado Cançado Trindade sobre la arbitrariedad en el derecho internacional consuetudinario*. La jurisprudencia de las decisiones que figuran en las opiniones del Grupo de Trabajo y de los demás titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas es otra fuente de referencia.

Decisión

17. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La prolongada reclusión del Sr. Al Uteibi es arbitraria por cuanto carece de fundamento jurídico, contraviene los artículos 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se inscribe en las categorías I, II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que proceda a la inmediata puesta en libertad del Sr. Al Uteibi y ajuste su situación a las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

19. En vista de los perjuicios derivados de la detención y privación de libertad ilícitas, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que proporcione una reparación adecuada al Sr. Al Uteibi y su familia.

20. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno de la Arabia Saudita a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 1° de septiembre de 2011.]

* Véase Corte Internacional de Justicia, *Ahmadou Sadio Diallo (la República de Guinea c. la República Democrática del Congo)*, fallo de 30 de noviembre de 2010, párr. 79; véase también la opinión disidente del Magistrado Cançado Trindade, párrs. 107 a 142.